

Crisis de la ayuda española para el desarrollo

Aproximadamente uno de cada seis seres humanos pasa hambre en la "sociedad global" del siglo XXI. Tan sólo este dato justifica moral y políticamente que los Estados más desarrollados financien políticas públicas de cooperación internacional. De hecho, la solidaridad interpersonal (sin distinción de nacionalidad, etnia, sexo o credo) es parte de la identidad política de la izquierda, y, en Europa desde hace décadas la izquierda apuesta por avanzar hacia la "internacionalización" de las políticas de solidaridad del Estado de bienestar para tratar de contribuir a un desarrollo más equilibrado de la humanidad.

La participación de España en el sistema de cooperación internacional es más reciente que la de otros países donantes de la OCDE, y, hasta fechas relativamente próximas, el peso de nuestras ayudas fue muy limitado. Lo cierto es que España ha modificado su posición en la esfera internacional en poco tiempo: hasta 1979 era catalogada por el Banco Mundial como "país en desarrollo" y en 1983 dejó de tener, por petición propia, el *status* de país receptor de ayuda. Casi tres décadas después, España logró consolidarse como uno de los principales donantes del sistema de cooperación internacional. Tal es así que, entre 1996 y 2009, la aportación pública española de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) se duplicó holgadamente, pasando de un cicatero 0,22% de nuestro Producto Nacional Bruto (PNB), al 0,46%. Como resultado, España fue en 2009 el sexto mayor donante de los 23 países de la OCDE que integran el Comité de Ayuda al Desarrollo, escalando desde el decimosegundo puesto que ocupaba anteriormente y avanzando hacia el cumplimiento del veterano objetivo del 0,7%.

Sin embargo, la senda de crecimiento de la Ayuda Oficial al Desarrollo española no estuvo carente de problemas estratégicos y de gestión. Entre otras, cinco deficiencias han sido destacadas: la excesiva dispersión geográfica y sectorial de nuestras ayudas (con más de

un centenar de países receptores y con desembolsos en prácticamente todos los sectores posibles de intervención); la limitada capacidad de generación de "conocimiento" de nuestro sistema de cooperación (tanto a través de la evaluación de las actuaciones, como a través del apoyo a investigaciones sobre aspectos relacionados con el desarrollo humano y la cooperación); la débil estructura institucional (con una amalgama insuficientemente coordinada de actores públicos de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los entes locales); la insuficiente dotación de personal técnico cualificado (imprescindible para planificar y ejecutar una política pública de calidad); y, en definitiva, la incoherencia de algunas de nuestras políticas nacionales, que impactan negativamente sobre los países más pobres (como las políticas migratorias, comerciales, medioambientales, de protección de la propiedad intelectual, etc.).

De haberse cumplido el objetivo del 0,7% comprometido por el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, España se habría ubicado entre los 3 o 4 principales donantes del mundo y habría alcanzado una

La crisis actual debe servir para revisar la política de cooperación española, no con ánimo de dismantlarla para compensar nuestro déficit público, sino con vocación de impulsar una política de calidad, que resuelva las ineficiencias del pasado y ayude a avanzar en una estrategia coherente de desarrollo internacional.

contribución "a la altura" del tamaño de su economía, de su nivel de desarrollo humano y de sus aspiraciones internacionales. No obstante, la actual crisis económica ha tenido un efecto directo e inmediato sobre el presupuesto de la Ayuda Oficial al Desarrollo, primero con una caída moderada en 2010, y después con unos recortes draconianos en 2011 y 2012 (del 33% y del

50%, respectivamente). Como resultado, si se cumplen las estimaciones para 2012, la ayuda pública española tendrá un presupuesto equivalente al que tenía en 1997, lo que supone una década y media de retroceso. En términos comparativos, el cicatero esfuerzo actual de financiación de la cooperación oficial española (en torno al 0,24% de nuestro PNB) contrasta drásticamente con el promedio actual de los países de la Unión Europea (próximo al 0,45%).

En este contexto de crisis económica –básicamente europea y de algunos países de la OCDE–, la ayuda es la política pública más recortada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Así se impone una estrategia de salida de la crisis “introvertida” y “egoísta”, centrada en España y en Europa, que recorta las políticas internacionales de solidaridad y desatiende los compromisos globales de desarrollo. Paradójicamente, en un contexto en el que la economía española sufre una “crisis de credibilidad” internacional, el actual Gobierno apuesta por reformas que pretenden apaciguar a los mercados, al tiempo que incurre en flagrantes incumplimientos de los compromisos españoles de solidaridad, dañando la credibilidad de España en los organismos internacionales de desarrollo. En estos momentos, en los que vivimos una grave crisis de las instituciones y del gobierno mundial, España apuesta por recortar sus aportaciones a las instituciones multilaterales que trabajan por el desarrollo humano mundial.

Más allá de la conveniencia de la estrategia del Gobierno de reducir el déficit público, lo cierto es que el recorte en la Ayuda Oficial al Desarrollo no va a aliviar significativamente el déficit (puesto que, en última instancia, la ayuda ha sido siempre una cantidad minúscula del presupuesto público español). En cambio, el recorte sí va a paralizar muchos procesos de desarrollo que se habían puesto en marcha en los países socios de nuestra cooperación, y está afectando ya a la capacidad de actuación (y de supervivencia) de muchas Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) españolas. Para colmo, esta “crisis de la ayuda española” pone de manifiesto, una vez más, las limitaciones de un sistema de cooperación financiado, principalmente, por los países ricos de la OCDE: en épocas de vacas gordas (para los donantes), cuando la economía global tiende a crecer, la Ayuda aumenta; en cambio, las ayudas se contraen en épocas de vacas flacas, y sus efectos restrictivos se contagian a los países en desarrollo.

El severo recorte de la Ayuda Oficial al Desarrollo no es una decisión política acertada. Ni es políticamente responsable, (en unos momentos en los que la recesión global está truncando los logros conseguidos en la estrategia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio); ni es justa (porque reducimos partidas que afectan a personas que no son responsables de esta crisis); ni es “valiente” (puesto que se recortan las ayudas a unos ciudadanos que no podrán “castigar” al Gobierno mediante su cambio de voto).

Resulta preocupante que, a pesar de la gravedad y la dimensión de los recortes de la ayuda, la opinión pública española apenas ha manifestado rechazo a este giro insolidario de España. Es más, las protestas de algunas ONGD (muchas de ellas constreñidas por su dependencia financiera respecto de las aportaciones públicas) y de algunos movimientos ciudadanos, apenas han tenido eco en los medios de comunicación. Y sin apenas reivindicaciones (ni pedagogía) sobre la necesidad de una política pública internacional de desarrollo, cala preocupantemente en la opinión pública española el demagógico discurso de la derecha que defiende que las ayudas ahora han de ser para los españoles, como si nuestras propias carencias económicas (al fin y al cabo, las de un país desarrollado) fueran equiparables a las de los países más pobres, y como si los delicados equilibrios mundiales (fuertemente sacudidos por los retrocesos globales en términos de pobreza, desigualdad y medioambiente) no fueran con España.

Desde las páginas de *TEMAS* queremos plantear un debate crítico sobre la cooperación pública española, que permita identificar los puntos débiles y los puntos fuertes de nuestras actuaciones, y proponer alternativas solidarias a unos recortes que no hacen sino contagiar nuestra propia crisis a los países en desarrollo que son socios de nuestra políticas internacionales de cooperación. La crisis debe servir a España para revisar su política pública de cooperación, no con el ánimo de dismantelarla para paliar su propio déficit público, sino con la vocación de construir una política de calidad, que resuelva las ineficiencias del pasado y proponga una estrategia coherente de desarrollo internacional. Dadas las dimensiones y la gravedad de los retos del desarrollo humano, la cooperación internacional debe consolidarse como una verdadera “política pública de Estado” en España, y nuestro compromiso solidario con la financiación de la ayuda debe ser irrenunciable. **TEMAS**